



Rama Judicial

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

República de Colombia

Santiago de Cali, ocho (08) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Auto Interlocutorio No. 064

Radicación:	76001-23-33-004-2016-00133-00
Medio de Control:	Nulidad y restablecimiento del derecho
Demandante:	Luz Marina Pedroza Cárdenas Luisalderonmendoza@Gmail.Com
Demandado:	COLPENSIONES dfcaicedo86@gmail.com secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
Asunto:	Auto incorpora pruebas, anuncia sentencia anticipada y da traslado para alegar de conclusión.

Mediante Auto No. 548 del 03 de diciembre de 2020, se fijó para el día 11 de febrero de 2021 a las 10:00 a.m., fecha para llevar a cabo la audiencia inicial dentro del proceso de la referencia.

Ahora bien, con ocasión a la expedición de Ley 2080 del 25 de enero de 2021¹ “*Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción*”, se hace necesario dar aplicación de dicha norma al presente proceso.

En ese sentido, se tiene que el artículo 42 de la reforma citada, adicionó el siguiente artículo a la Ley 1437 de 2011, del siguiente tenor:

“Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

“1. Antes de la audiencia inicial:

- a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho
 - b) Cuando no haya que practicar pruebas
 - c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
 - d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
- (...).”

De acuerdo a lo anterior del proceso se advierte lo siguiente:

¹ Fecha de la firma por parte del señor Presidente de la República de Colombia



La parte demandante aportó pruebas documentales (Fls. 12 a 46 y 54 a 79), y solicitó oficiar a la entidad accionada a fin que aportara las Resoluciones 2491 de 2010 y 2239 de 20 de marzo de 2012, expedidas por la Seccional del Valle del Cauca, así como las Resoluciones 02314 de 2008, 03226 de 2008 y 02856 de 2010 expedidas por la Seccional de Risaralda, con el fin de demostrar que, en dichas resoluciones, la entidad demandada aplicó el 100% de los factores solicitados en la liquidación de la pensión de otros funcionarios de la Rama Judicial, pretensión de la demanda; prueba que se negará por estimarla inútil² para los fines del proceso.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha indicado que existen unos requisitos generales para la procedencia de todos los medios de prueba, los cuales deben ser verificados por el juez al momento determinar si la prueba debe ser decretada o rechazada, los cuales son:

"[...] 1. Pertinencia. Alude a que el juez debe verificar si los hechos resultan relevantes para el proceso.

2. Conducencia. Se refiere a que el medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho.

3. Oportunidad. El juez no podrá tener en cuenta las pruebas solicitadas y aportadas por fuera de las oportunidades legales.

4. Utilidad. Indica que no se pueden decretar las pruebas manifiestamente superfluas, es decir, las que no tienen razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba.

5. Licitud. Para valorar una prueba, ésta no debe contravenir derechos fundamentales constitucionales, de lo contrario será nula de pleno derecho³ [...]" (Destacado fuera del texto original).

En tal virtud, y según las reglas procesales y los criterios razonables, una prueba es considerada inútil cuando en ningún caso puede contribuir a esclarecer los hechos controvertidos, y como quiera que las pretensiones de la demanda devienen de un tema de ley, donde no se debate derecho igualdad, de ninguna manera los reconocimientos que la entidad demandada haya realizado a otros servidores públicos, podría servir de parámetro en el juicio ordinario y de control de legalidad en concreto que se haga al respecto, como quiera que para el fallador debe basarse estrictamente en los parámetros legales, en las pruebas relacionadas como su vinculación laboral y cotización al sistema general de seguridad social, entre otros aspectos objetivos (para este caso en particular); así como el

² En términos generales, se puede decir que la prueba es inútil cuando sobra por no ser idónea, no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que este solo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo. Si nos valiéramos de una metáfora, podríamos decir que el proceso de conducir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para probar el fallo y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente necesario. "MANUAL DE DERECHO PROBATORIO" 16 edición, PARRA QUIJANO, JAIRO, Librería ediciones del profesional Ltda., páginas 153 a 157

³ Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de 3 de marzo de 2016; Expediente No. 11001-03-25-000-2015-00018-00; C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.



estado del arte y la jurisprudencia del máximo órgano de cierre de esta jurisdicción sobre el tema que se debate, lo que pone de relieve la inutilidad de la prueba para la resolución del caso concreto, e impone el deber de negarla.

Por otra parte, la apoderada de COLPENSIONES aportó en un CD el expediente administrativo de la demandante (Fl. 169) y no solicitó la práctica de pruebas.

En tal sentido, se observa por el Despacho que las pruebas aportadas son suficientes para resolver el litigio y estando debidamente incorporadas al expediente se decretarán; al no ser necesario decretar pruebas adicionales, se correrá traslado para alegar de conclusión por escrito por el término de diez (10) días, término dentro del cual el Ministerio Público podrá rendir su concepto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la ley 1437 del 2011, por remisión expresa del 286 ibidem.

De otro lado, se reconocerá personería a la abogada MARIA JULIANA MEJIA GIRALDO, con C.C. No. 1.144.041.976 y T.P. No. 258258 del CS de la J., en calidad de representante legal suplente de la firma MEJIA Y ASOCIADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S., actuando en nombre y representación de COLPENSIONES de conformidad con el poder general otorgado mediante la escritura pública No. 3373 del 03 de septiembre de 2019 de la Notaria Novena del Circulo de Bogotá. Igualmente, se reconoce como apoderado sustituto de COLPENSIONES al Dr. DIEGO FERNANDO CAICEDO TROCHEZ, identificado con C.C. No. 1.113.624.533 y T. P No. 183.181 del C.S. de la J., conforme la sustitución de poder allegada al expediente digital.

Se le informa a las partes y sus apoderados que para los efectos del artículo 8 de la Ley 2080 de 2021 que adiciona el 53A de la Ley 1437 de 2011, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co

Por lo anterior, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, modificada por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, la presente providencia es suscrita por el magistrado ponente.

En tal virtud, se

DISPONE:

PRIMERO: APLICAR al proceso las disposiciones de la Ley 2080 de 2021 en la forma dispuesta en la parte motiva de este auto, en consecuencia,

SEGUNDO: CANCELAR la práctica de la audiencia inicial programada para el día jueves, **11 de febrero de 2021**, a través del Auto No. 548 del 03 de diciembre de 2020.



TERCERO: TENER como pruebas los documentos aportados con la demanda y su contestación.

CUARTO: NEGAR la prueba documental solicitada por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva.

QUINTO: PRESCINDIR del periodo probatorio.

SEXTO: CORRER traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, por el término de diez (10) días. Dentro del mismo término, el agente del Ministerio Público podrá presentar su concepto.

SÉPTIMO: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada MARIA JULIANA MEJIA GIRALDO, con C.C. No. 1.144.041.976 y T.P. No. 258258 del CS de la J., en calidad de representante legal suplente de la firma MEJIA Y ASOCIADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S., como apoderada judicial de COLPENSIONES.

OCTAVO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado al DIEGO FERNANDO CAICEDO TROCHEZ, identificado con C.C. No. 1.113.624.533 y T. P No. 183.181 del C.S. de la J., como apoderado sustituto de COLPENSIONES.

NOVENO: REITERAR a las partes, vinculados y sus apoderados que para los efectos del artículo 2 del decreto 806, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA


VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado